

C.A de Santiago

Santiago, once de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO:

Ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se substanciaron estos autos RIT N° O-3549-2020, caratulados “Merino con Innovación Social y Fundraising SPA”, sobre demanda de despido improcedente y cobro de prestaciones, interpuesta por Marcia Oriana Cerda Orellana y Milton César Merino Guerrero, en contra de Innovación Social y Fundraising SPA:

Por sentencia definitiva de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el juez titular Daniel Juricic Cerda, se decidió que:

1.- Se acoge la excepción de pago opuesta por la demandada hasta por la cantidad de \$7.266.508 respecto de la demandante señora Cerda y \$2.526.448 respecto del demandante señor Merino.

2.- Se acoge la demanda reconvencional, solo en cuanto se declara que el demandado reconvencional señor Merino es deudor de la empresa demandante reconvencional en la cantidad de \$7.500.000.

3.- Se acoge la excepción de compensación opuesta respecto del demandante señor Merino hasta por la cantidad de \$5.964.842.

4.- Se acoge parcialmente la demanda principal, sólo en cuanto se condena a la demandada principal a pagar:

a. \$3.860.657 a la demandante señora Cerda por recargo legal de 30%.

b. \$2.316.394 al demandante señor Merino por recargo legal de 30%.

c. Los reajustes e intereses previstos en el artículo 173 del Código del Trabajo sobre esas cantidades.

5.- Se rechazan, en lo demás pedido, las señaladas demandas y excepciones.

6.- Cada parte soportará sus costas.

En contra esta decisión, ambas partes interpusieron recursos de nulidad, comenzando con el demandante, quien funda su pretensión en tres causales, interpuestas conjuntamente, a saber: la del 478 letra e), por omisión en la sentencia del requisito del artículo 459 N°4 del Código del



Trabajo, en razón de haberse acogido la demanda reconvencional y la excepción de compensación respecto al demandante Merino; conjuntamente la del 478 letra b), por las mismas decisiones; y, conjuntamente, la del 477 por infracción del artículo 13 de la Ley N° 19.728.

El recurso de la demandada se funda en dos causales, interpuestas una en subsidio de la otra, a saber: la del artículo 478 letra b); y la del 478 letra e) por omisión del artículo 459 N°4 del Código del Trabajo.

Declarado admisible el recurso, se procedió a la vista del mismo, oportunidad a la que asistieron los abogados de ambas partes y fueron escuchados sus alegatos por video conferencia.

CONSIDERANDO:

En cuanto al recurso de la demandante:

1.- Causales del artículo 478 letra e) y b) del Código del Trabajo

PRIMERO: La demandante alega conjuntamente las causales del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, por omisión del requisito artículo 459 N°4 del mismo cuerpo legal; y la del artículo 478 letra b), afirmando que se ha efectuado un análisis sesgado y parcial de los medios probatorios, en relación con la excepción de compensación y demanda reconvencional respecto al trabajador Milton Merino Guerrero.

Refiere que el tribunal tuvo por acreditado que la demandada pagó al demandante Merino cantidades por “reliquidación de pagos pendientes” y que este mismo adeuda a la empresa la suma de \$7.500.000. De esta forma, se estimó que lo debido al actor Merino está pagado hasta \$2.526.448 y compensado en el exceso.

Ello, desatendiendo la documental consistente en el finiquito de este demandante, específicamente lo que dice relación con la nomenclatura de “Reembolso y reliquidación de pagos pendientes”. en concordancia con lo declarado por la demandada en el libelo de contestación en el cual se indica lo siguiente “... cabe agregar que, en el caso del Sr. Merino, el monto indicado por este concepto fue de \$2.526.448.-, toda vez que de los \$9.826.448.- pesos que nuestra representada reconoció adeudarle, se dedujo,



a título de compensación, la suma de \$7.300.000.- pesos, suma ésta que había sido previamente otorgada por Twisters Chile al Actor por concepto de un mutuo sin interés”.

Sostiene que lo anterior constituye una omisión flagrante que le hubiere permitido al sentenciador, conforme a las reglas de la sana crítica y en base al principio de la lógica, establecer que el demandante nada adeuda por concepto del mutuo sin interés, a diferencia de lo decidido en la sentencia, desechando la excepción de compensación a ese respecto.

Señala que el fallo vulnera flagrantemente el principio de identidad en tanto establece que el actor sería deudor de la demandada en virtud de la demanda reconvencional y que sería procedente compensar respecto de la misma, lo que dice relación con el mutuo sin interés por la suma de \$7.300.000, sin tomar en consideración lo indicado por la demandada en el escrito de contestación en lo relativo a dicho concepto y lo señalado en el finiquito, específicamente en la nomenclatura de “Reembolso y reliquidación de pagos pendientes”.

Asimismo, entiende que el tribunal al momento de acoger la demanda reconvencional no analizó el documento denominado “finiquito” de don César Merino a la luz de lo que dice la demandada en la propia contestación, quien advirtiendo la poca claridad de los conceptos pagados en dicho documento los explica de la manera ya indicada. Pese a ello, el tribunal da una explicación distinta, señalando que mi representado sería deudor de la demandante reconvencional y sería procedente la compensación de las sumas adeudadas y reconocidas por la demandada, en lo que dice relación al mutuo sin interés.

Considera que ambos vicios tienen influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por cuanto sin estos se habría rechazado la demanda reconvencional y la excepción de compensación en lo que dice relación al mutuo sin interés por la suma de \$7.300.000.

SEGUNDO: La ley procesal laboral permite esgrimir más de una causal de nulidad en un mismo recurso y autoriza también al recurrente para hacerlo en forma conjunta, como se hiciera en este caso. Con todo, esa forma de interposición opera en la idea que todas esas causales son



compatibles o que no se contraponen, porque de lo contrario se torna racionalmente imposible su resolución.

TERCERO: En este caso, las mencionadas causales no pueden deducirse en forma conjunta, puesto que pugnan entre sí. En efecto, al deducirse la causal del artículo 478, letra b) del Código del Trabajo, el recurrente acepta la validez formal de la sentencia, esto es, asume que en ella se han observado todas las exigencias legales para su extensión, esto es, que se han dado razones para la valoración probatoria y que toda la prueba ha sido valorada, aunque de un modo incorrecto, en el sentido que las decisiones probatorias vertidas en el fallo vulneran las reglas de la sana crítica; en cambio, a través de la causal del artículo 478, letra e) se postula algo inverso, esto es, que esa sentencia está viciada de forma, lo que la haría susceptible de invalidación, sea porque se ha omitido la valoración de los medios de prueba o porque no se han dado razones o motivos que justifiquen la valoración efectuada. Desde luego, tales planteamientos se contraponen y no pueden coexistir, de manera que resulta de una imposibilidad lógica interponer esas causales en forma conjunta; motivos por los cuales deben ser rechazadas.

2.- Causal: artículo 477 del Código del Trabajo

CUARTO: Conjuntamente, el demandante invoca la causal de infracción de ley, aseverando que el fallo, al rechazar la devolución del aporte patronal al seguro de cesantía, ha vulnerado el artículo 13 de la Ley N° 19.728.

La funda, señalando que el fallo recurrido contradice expresamente los efectos de haber declarado el despido como improcedente, toda vez que el no haber acreditado los fundamentos del despido por parte del empleador, la causal sería inexistente, por lo que mal puede beneficiarse la empresa a través de una pretensión improcedente, injustificada e ilegal, abusando del derecho, como lo es el descuento antes indicado.

Considera que una correcta aplicación del artículo 13 implica entender que una declaración de improcedencia, no satisface el presupuesto legal, siendo procedente la devolución requerida.

QUINTO: Que en cuanto a la devolución del aporte del empleador



al seguro de cesantía, el artículo 13 de la Ley N° 19.728, establece que: *“Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios...”*, agregando el inciso segundo que *“se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía...”*.

De acuerdo al tenor del artículo reseñado, para que opere dicha regla, es necesario que el contrato de trabajo termine por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, y al haberse declarado en la sentencia que el despido de que fue objeto la parte demandante fue injustificado, no se satisface la condición que la ley prevé para acceder a la imputación por parte del empleador a la suma que él pagó con cargo al seguro de cesantía en la cuenta individual respectiva.

Aceptar lo contrario constituiría un incentivo para invocar una causal de despido errada con el objeto de obstaculizar la restitución y además significaría que un despido injustificado, en razón de una causal impropia, produciría efectos a pesar que la sentencia lo declaró improcedente e injustificado, razón por la cual el motivo de nulidad por la causal en revisión debe ser acogido.

En cuanto al recurso de la demandada:

1.- Primera causal: artículo 478 letra b) del Código del Trabajo

SEXTO: Respecto a la causal principal la demandada señala que la sentencia ha sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, en relación a haber declarado injustificado el despido de los actores, indicando expresamente que se han vulnerado el principio de razón suficiente, el de no contradicción y las máximas de la experiencia.

Expone que para efectos de acreditar que los demandantes ejercían cargos de exclusiva confianza y detentaban facultades generales de administración, se incorporaron -entre otros antecedentes-, la escritura pública de fecha 12 de marzo de 2015 mediante la cual se le confirió a la Sra. Marcia Cerda un Mandato General Amplio, el cual indica: “Segundo: Que por el presente instrumento viene en conferir mandato general tan



amplio como en derecho sea procedente a Marcia Cerda Orellana”. Y luego agrega: Cuarto: Faculta expresamente a Marcia Oriana Cerda Orellana, por la presente escritura para que lo represente y actúe por él a nombre de la Sociedad “Innovación Social y Fundraising SPA.”

Indica que en mérito de estas probanzas, era posible acreditar que la actora no sólo ejercía funciones de administración en los términos del artículo 4º del Código del Trabajo, sino que, además, contaba con amplias facultades para comprometer el patrimonio de la sociedad y celebrar múltiples actos jurídicos, representándola ante instituciones de diversa índole.

Luego, en el caso del señor Merino, la sentencia, tuvo por establecido que detentaba el cargo de director general de la demandada, siendo superior y jefe directo de la co demandante Cerda.

Refiere que la sentencia atenta contra el principio de razón suficiente y el de no contradicción, toda vez que omite todo el razonamiento que llevó al juez a establecer que un mandato general amplio, con plenas facultades de acción y representación, representaba un mero poder bancario, y de cuyo contenido no era posible concluir que representaba el otorgamiento de facultades generales de administración, estimando que de haberse valorado correctamente las probanzas, exponiendo razonamientos conforme a ella, se habría desestimado la demanda, por cuando la causal de desahucio se encontraba conforme a derecho.

Posteriormente, en cuanto a las máximas de la experiencia, considera que las facultades que ambos demandantes detentan, conforme la prueba rendida, implican necesariamente un nivel elevado de exclusiva confianza, no siendo usual que se otorguen las mismas a trabajadores distintos a los señalados en el artículo 161 inciso 2º del Código del ramo.

SEPTIMO: Resulta preciso insistir en lo que se ha venido indicando por esta Corte, en cuanto a que la causal del artículo 478, letra b) del Código del Trabajo atañe a la revisión de las razones que sustentan la motivación probatoria y la subsecuente fijación de los hechos que se han tenido por probados, cuando en esa actividad se cometen yerros que



suponen contrariar los parámetros de la lógica, de la técnica, de los conocimientos científicos o de las reglas de experiencia.

Expresado en otros términos, de lo que se trata es de fiscalizar que las razones vertidas por el juzgador respeten esos lineamientos, de manera tal que esta causal de nulidad tiene como presupuesto esencial que esas razones existan.

OCTAVO: A la luz de lo apuntado precedentemente, cabe subrayar que los cuestionamientos del recurrente no se ajustan a esas exigencias, dado que -en gran medida-, sus reproches se dirigen a denunciar la falta de razones. En síntesis, no se trata que el recurrente sostenga que sería errada la motivación probatoria del fallo sino que reclama su ausencia. Un vicio de esa naturaleza -de ser efectivo-, importa el incumplimiento de requisitos previstos en la ley para el pronunciamiento de una sentencia y, por ende, resultan extraños a la causal de nulidad que se hace valer.

NOVENO: Asimismo, se advierte que todo el recurso intentado gira en torno a sostener que los demandantes tenían facultades de administración, salvo breves referencias de que se trataba de puestos de exclusiva confianza, confundiendo en su relato recursivo ambas hipótesis, sin distinguirlas como lo hace la regla del inciso segundo del artículo 161 del Código del Trabajo, por lo que desde esa perspectiva, debe concluirse necesariamente que no se configuraría una influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, pues el despido se produjo invocando otra hipótesis, esto es, que los actores detentaban cargos de exclusiva confianza. Así se lee en las cartas de despido de los demandantes. En ese entendido, la prueba debía referirse a la naturaleza de la función y a las cualidades o componentes que permitirían considerarlo como de exclusiva confianza. Empero, la impugnación y el análisis probatorio propuesto en el recurso atañen a supuestos poderes de administración, esto es, una hipótesis legal distinta de aquella invocada en los avisos de despido en comento.

2.- Segunda causal: en subsidio, artículo 478 letra e) del Código del Trabajo.



DÉCIMO: En subsidio, la demandada interpone la causal del artículo 478 letra e), indicando que el fallo fue dictado con omisión del artículo 459 N° 4 del cuerpo legal indicado.

Señala que la sentencia carece de un razonamiento que permita comprender por qué un mandato general que otorga amplias facultades para actuar ante múltiples instituciones bancarias, financieras y estatales, comprometiendo el patrimonio de la empresa e influyendo en su organización interna, debe ser calificado como un mero poder bancario.

Añade que tampoco es posible comprender por qué facultades y funciones tan amplias y relevantes como las detentadas por los actores no constituyen facultades generales de administración y/o propias de un cargo de exclusiva confianza, limitándose a aseverar que los demandantes mantenían funciones directivas o superiores, pero que estas no pueden calificarse como de exclusiva confianza, sin que exista razonamiento para arribar a tal conclusión.

DECIMO PRIMERO: Que el legislador exige del sentenciador -conforme a la hipótesis de invalidación en estudio- que éste exponga en el fallo, luego de analizar las pruebas rendidas en el juicio, las razones que, en definitiva, lo llevaron a una determinada conclusión. Se trata de exteriorizar el proceso interno que hace el fallador, en forma razonada y coherente, lo que resulta necesario pues permite el control de las decisiones judiciales dentro del proceso.

Como indispensable correlato de lo anterior, la causal invocada requiere, para ser acogida, los siguientes requisitos: a) que el recurrente singularice cuáles fueron los medios de prueba omitidos; b) que el sentenciador efectivamente haya omitido el análisis de determinados medios de prueba en su sentencia; y c) que esa omisión influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

DECIMO SEGUNDO: Que, en concordancia al razonamiento contenido en el fundamento décimo de esta sentencia a propósito de la causal del artículo 478 letra b) del Código del ramo, en relación, ahora, a la letra e), se advierte que de haberse configurado la omisión que denuncia el recurrente en cuanto a la existencia del vicio consistente en la falta de



análisis de toda la prueba rendida, lo que a su juicio, permitía encuadrar la función de los trabajadores en el artículo 161 del Código del Trabajo, lo cierto es que las probanzas apuntaban a demostrar la extensión de los poderes de administración de los actores, en circunstancias que el despido se basó en el hecho de tratarse de cargos de exclusiva confianza, -como sostienen las cartas al efecto-, por lo que bajo ninguna circunstancia puede configurarse una influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, pues el despido se produjo invocando otra hipótesis legal.

DECIMO TERCERO: Que, en consecuencia, la causales invocadas por el demandado carecen de fundamento, por lo que el recurso debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, se **acoge, sin costas**, el recurso de nulidad deducido por la parte demandante por la causal del artículo 477 del Código del Trabajo por infracción al artículo 13 de la Ley N° 19.728, en contra de la sentencia de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en autos RIT O-3549-2020.

Acordada en lo que atañe a la infracción del artículo 13 de la Ley 19.728, con el voto en contra del ministro señor Astudillo, quien fue del parecer de rechazar en ese extremo la impugnación en virtud de las razones que siguen:

1° El seguro obligatorio que consagra la Ley N° 19.728 persigue atenuar los efectos de la cesantía y de la inestabilidad en el empleo, estableciendo un sistema de ahorro obligatorio sobre la base de la instauración de cuentas individuales por cesantía -conformado por cotizaciones mensuales del empleador y del trabajador-, y la creación de un fondo de cesantía solidario que opera como uno de reparto, complementario al referido sistema de cuentas, que se financia con una fracción que aporta el empleador y otra que es de origen estatal;

2° La regla del artículo 13 de la Ley 19.728 no es una norma que pueda ser tenida por “clara”, desde que ha sido objeto de interpretaciones divergentes, de manera que para dilucidar su alcance y sentido y proceder a



su posterior aplicación se puede recurrir a la intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento;

3º En tal contexto, cabe recordar que en el Mensaje -que diera origen a la actual Ley 19.728, Sobre Seguro de Desempleo-, se consignó que: “... *Mediante el establecimiento del presente sistema, el trabajador logrará una mayor certeza en la percepción de los beneficios por cesantía, en el caso de las contingencias referidas. A su vez, el empleador verá transformada su actual responsabilidad única de indemnización, por otra en que se combina el pago de las cotizaciones previas con el pago directo de una prestación...*”.

4º La manifestación indicada resultó coherente con la regulación consensuada por los órganos colegisladores, dado que a través suyo se pretendieron morigerar los efectos de la cesantía e inestabilidad en el empleo. Para ese fin, se conjugó un esquema de ahorro obligatorio, sobre la base de Cuentas Individuales por Cesantía –conformado por cotizaciones mensuales del empleador y del trabajador- con la creación de un Fondo de Cesantía Solidario que opera como fondo de reparto, complementario al sistema de cuentas individuales. A través de este sistema se propende al equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de un trabajador cesante (cuando el motivo del cese no da derecho a indemnización) y la carga económica que puede representar para un empleador el hecho del despido (cuando la causal de terminación trae aparejada, *per se*, la indemnización correlativa).

5º De esta forma, al tratarse de causales de despido que de acuerdo con el Código del Trabajo no dan derecho a indemnización por años de servicios, el seguro de cesantía actúa como indemnización a todo evento, puesto que, en tales casos, con la sola presentación de los antecedentes que den cuenta del término de la relación laboral, el trabajador tiene derecho a efectuar giros mensuales con cargo al fondo acumulado con las cotizaciones aportadas y su rentabilidad, incluidas las que haya realizado el empleador (artículos 14, 15 y 51). En los otros casos –que de suyo dan derecho a indemnización, esto es, las hipótesis del artículo 161 del Código del Trabajo-, el régimen de la ley 19.728 mantiene subsistente la



responsabilidad directa del empleador, de modo que éste debe pagar la indemnización legal pertinente. Sin embargo, a modo de equilibrar sus efectos, dicho empleador queda obligado a enterar únicamente la diferencia que se produzca entre el monto acumulado como resultado de su aporte en la Cuenta Individual por Cesantía y el equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicios y fracción superior a seis meses.

6º Así las cosas, es un hecho macizo que el contrato terminó por necesidades de la empresa, de modo que la declaración de injustificado del mismo sólo trae como consecuencia la prevista legalmente, esto es, la aplicación del incremento del 30%. Por semejantes razón está en lo correcto la sentencia al denegar la restitución de lo descontado o imputado a la indemnización por años de servicios lo pagado por el empleador por concepto de seguro de cesantía.

Regístrese y comuníquese.

Redacción Ministro (S) Carlos Hidalgo Herrera, quien no firma por no tener acceso remoto para hacerlo y del voto su autor.

Regístrese y comuníquese.

Nº 3283-2021.-

OMAR ANTONIO ASTUDILLO
CONTRERAS
MINISTRO
Fecha: 11/11/2022 13:47:46

LILIAN ATENAS LEYTON VARELA
MINISTRO
Fecha: 11/11/2022 15:31:40



Pronunciado por la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C., Lilian A. Leyton V. Santiago, once de noviembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a once de noviembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, once de noviembre de dos mil veintidós.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 478 del Código del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

VISTOS:

Atendido el motivo para acoger el recurso de nulidad de la parte demandante, se mantiene la sentencia anulada en todo lo no afectado, pero se prescinde del motivo décimo cuarto.

Y teniendo, además, y en su lugar presente:

En cuanto a la devolución del aporte al subsidio de cesantía

PRIMERO: Que son hechos de la causa que el despido del trabajador se produjo por la causal de necesidades de la empresa, que tal decisión era improcedente y que el empleador descontó lo pagado por aporte a la AFC.

SEGUNDO: Que el artículo 13 de la Ley N° 19.728, contiene un beneficio a favor del empleador que le permite rebajar el monto que efectivamente debe desembolsar para el pago de las indemnizaciones que obligatoriamente debe enterar, a través del descuento o compensación de las sumas que aportó para el seguro de cesantía; herramienta que encuentra su fundamento en la intención legislativa de facilitar el pago de dichos estipendios en el contexto de la finalidad de la Ley, cuyo objeto es atenuar los efectos de la cesantía y de la inestabilidad en el empleo mediante un sistema de ahorro obligatorio que opera, en el fondo, como un seguro que garantiza un resarcimiento a todo evento, desde que se acciona con la sola presentación por parte del trabajador de los antecedentes que den cuenta de su despido. De esta manera, se logra equilibrar los intereses del dependiente con las necesidades de los empleadores, especialmente aquellos que conforman la micro, pequeña y mediana empresa, para que en períodos de dificultad con la subsistencia de las mismas -contexto que configura y autoriza el despido por las causales del artículo 161 del Código del Trabajo- cuenten con un auxilio que facilite el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

TERCERO: Que la procedencia del descuento que previene el citado artículo 13 requiere no solo que el contrato de trabajo haya



terminado formalmente por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, sino que dicho motivo haya sido validado judicialmente en caso de impugnarse su justificación, pues de otro modo no se satisface la ratio legis que fundamenta la consagración del instituto en cuestión, desvirtuándose con ello la intención que se tuvo en consideración para la dictación de la norma que se analiza.

CUARTO: Que, comprender dicha norma de modo diverso, implicaría un apoyo al actuar injustificado del empleador, constituyendo un incentivo perverso para que, a fin de obtener el beneficio descrito, invoque una causal errada validando un aprovechamiento del propio dolo o torpeza, por cuanto significaría que un despido indebido, en razón de una causal impropia, producirá efectos que benefician a quien lo practica, a pesar de que la sentencia declare la causal improcedente e injustificada.

QUINTO: Que, por lo tanto, la correcta interpretación de la norma en estudio implica que la declaración de un despido improcedente por la causal de necesidades de la empresa, priva de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley 19.728. A lo anterior cabe agregar que si la causal fue declarada improcedente, siendo la imputación válida, de acuerdo a esa precisa causal, corresponde aplicar el aforismo de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Mal podría entonces validarse la imputación a la indemnización si lo que justifica ese efecto ha sido declarado improcedente.

Por los fundamentos anteriores, más lo dispuesto en los artículos 160, 477 y 482 del Código del Trabajo,

Que se **ACOGE** la demanda interpuesta, en cuanto declara improcedente el descuento del aporte del empleador a la AFC, debiendo la demandada abstenerse de efectuarlo.

Ejecutoriada la sentencia, remítanse los antecedentes al Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Regístrese y comuníquese

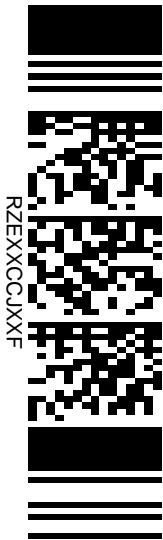
Redacción del ministro (s) señor Carlos Hidalgo, quien no firma por no tener acceso remoto para hacerlo

Rol N°3283-2021.-



OMAR ANTONIO ASTUDILLO
CONTRERAS
MINISTRO
Fecha: 11/11/2022 13:47:48

LILIAN ATENAS LEYTON VARELA
MINISTRO
Fecha: 11/11/2022 15:31:46



Pronunciado por la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C., Lilian A. Leyton V. Santiago, once de noviembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a once de noviembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

